

Semanario Judicial, remítase el expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision. El C. juez de Distrito lo provyó, mandó y firmó.—*Antonio Rivero.*—*Ignacio Mercado.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril veintidos de mil ochocientos setenta y dos.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Puebla, por la señora D^a Ignacia Salamanca, contra el juez 4^o de Paz de aquella ciudad, que ha conocido en una demanda civil entablada por la promovente, sin haber hecho la protesta al recibirse del juzgado, alegando que sin ese requisito no podía tener la jurisdicción, y en consecuencia se han violado por el C. juez, las garantías que otorgan los artículos 13 y 14 de la carta federal de la República. Vistas las constancias de autos y

Considerando: que sea cual fuere el recurso que proceda por la falta de la protesta del funcionario contra el cual se solicita el amparo, debía haberse interpuesto en tiempo oportuno, que la jurisdicción del C. juez 4^o de Paz fué reconocida por la peticionaria, en las instancias del juicio promovido ante ese juzgado; y que el referido juez ejerce las funciones de su ministerio con acuerdo de las autoridades del Estado, no puede decirse que se hayan violado algunas de las garantías que otorgan los artículos 13 y 14 de la Constitución de la República; con tales fundamentos se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el juzgado de Distrito de Puebla, en la parte que declara: que la justicia de la Union no ampara ni protege á la Salamanca en las garantías á que se refiere el presente juicio, condenándola á una multa de cien pesos con ar-

reglo al art. 16 de la ley de 20 de Enero de 1869.

Devuélvanse sus actuaciones con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos respecto del primer punto, y por mayoría respecto de la multa los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Aza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Abril veintitres de mil ochocientos setenta y dos.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

promovido ante el juzgado 2^o de Distrito de México por Doña Manuela Mijango á nombre de su hijo Francisco Rosales Lopez, que ha sido consignado por el C. gobernador al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El promotor que suscribe, en el juicio de amparo promovido por Doña Manuela Mijango quejándose de haber sido destinado su hijo Francisco Rosales Lopez por el C. gobernador del Distrito al servicio en la banda como tambor del batallon núm. 26 de línea, supuesto el estado del juicio que es el de alegar, y haciéndolo en la forma prescrita por el art. 13 de la ley de 20 de Enero de 1869 dice: que la justificación de vd. se ha de servir resolver en definitiva: que la Justicia de la Union ampara y protege al jóven

Francisco Rosales Lopez contra la determinacion del C. gobernador del Distrito que lo consignó á servir en la banda del batallon mencionado, por haberso violado con este acto las garantías individuales otorgadas en los artículos 5º, 13, 14 y 21 de la Constitucion, en vista de las razones que pasa brevemente á manifestar.

La simple referencia de los artículos citados del Código fundamental, íntimamente relacionadas con el hecho que motiva el recurso interpuesto, bastarian en pleno rigor y observancia de la Constitucion para el otorgamiento del amparo que se solicita, estando probado el hecho por la confesion de la autoridad responsable segun los términos de la comunicacion, que aunque de una manera extemporánea remitió á este juzgado por via del informe prescrito por la ley; pero estando suspensas las garantías individuales por la ley de 1º de Diciembre del año próximo pasado, en cuyo texto cree fundarse el C. gobernador para haber dictado su determinacion, es necesario analizar las circunstancias especiales del presente caso, para ver si efectivamente el quejoso está comprendido en las prevenciones y el espíritu de esa disposicion legal.

Esta ha tenido por objeto, proveer de brazos útiles para el servicio de las armas á las fuerzas que la revolucion hizo necesarias al Supremo gobierno para destruirla y restablecer el orden y la paz, de manera que todos los actos, ya de las autoridades subalternas, ya de los gefes de los cuerpos que se hayan ejecutado sin llenar aquellas condiciones, ni están conformes con el objeto y espíritu de la ley de suspension de garantías, y son esencialmente atentatorias á los preceptos constitucionales; y por tanto, cuando se ha solicitado el amparo de estos, se ha concedido sin escepcion; segun las ejecutorias que obran en los juicios sustanciados en este juzgado 2º de Distrito.

En el presente caso está enteramente probado, por la informacion de testigos ren-

didada por parte del quejoso; por la filiacion de el que obra en autos remitida por el gefe del cuerpo, y aun por el informe del C. gobernador: que Francisco Rosales Lopez tiene diez y seis años, y por tanto es menor de edad, á quien no es obligatorio el servicio de las armas ni en el ejército permanente ni en el alistamiento de la guardia nacional, conforme al texto expreso de los artículos 34, 35 y 36 de la Constitucion en la parte relativa á esta materia. Por consiguiente, si el código fundamental mismo tiene exceptuados de tales cargos ó obligaciones á los menores de edad, conforme á esa misma suprema ley, se reputan inhabiles para tales prestaciones, y con mayor razon cuando éstas les sean impuestas contra su voluntad, como lo demuestra el hecho mismo de haberse solicitado el amparo que contradice de una manera evidente la aseveracion de la inspectora del Tecpan, trascrita por el C. gobernador en su informe, respecto de que el expresado Rosales habia pedido ó que se le pusiera en los talleres de la carcel de Bolen ó que se le destinara por el repetido C. gobernador á servir de soldado en algun cuerpo. Mas como la carrera de las armas no tiene, segun las instituciones de la República, el carácter de sistema penitenciario en el que se habia de colocar para su correccion á Francisco Lopez Rosales por su mala conducta en el establecimiento del Tecpan, se percibe sin violencia, que la determinacion que motiva el ocurso en solicitud del amparo, importa la imposición de una pena contra lo dispuesto en el art. 21 de la Constitucion por el caracter de permanencia y mayor duracion de un mes que es hasta donde se estiende la facultad de las autoridades políticas para la imposicion de penas correccionales.

Ya en otro caso semejante, aunque emanado del gefe de un cuerpo que tomó de leva á un menor de la misma edad que Francisco Rosales, ha expuesto el que suscribe las razones por las cuales la ley de

suspension de garantías, no puede ni debe hacer comprensiva á los menores de edad sobre quienes no gravitan los deberes y obligaciones de los ciudadanos, para prestar sus servicios en defensa de la República y sus instituciones, porque para la suspension de las garantías que la misma Constitucion establece implícitamente en favor de los menores, era necesario una determinacion expresa de la ley que solo se refiere en su sentido natural á los ciudadanos; y por consiguiente, salirse de su texto literal es traslimitarla y violentar su sentido y su objeto, aplicándola á los casos que ella quiso exceptuar; por que si hubiera tenido la mente de comprenderlos, son de aquellos que forzosamente debiera haberlos expresado, por la naturaleza misma de ellos, en razon de que importa la supresion aunque transitoria de las esconciones y prerogativas que toda la legislacion tiene establecidas á favor de los menores. Por todas estas razones, el que suscribe repite en conclusion como tiene pedido al principio, que vd. se sirva declarar en su fallo, que la justicia federal ampara y protege al joven Francisco Rosales Lopez contra la determinacion del C. gobernador del Distrito que ha violado en su persona las garantías constitucionales mencionadas.

México, Abril diez de mil ochocientos setenta y dos.—*Moctezuma.*

Sentencia del C. juez de Distrito.

México, Abril veinte de mil ochocientos setenta y dos.

Visto el presente juicio de amparo, promovido por Manuela Mijango, á nombre de su hijo Francisco Rosales, á virtud de reputar violadas en la persona de éste las garantías que otorga la constitucion en sus artículos 5, 13 y 14, por el hecho de habersele consignado al servicio militar; vista la contestacion que por via de informe re-

mitió el ciudadano jefe encargado del cuerpo número 26; lo pedido por el ministerio fiscal; y visto en fin lo que debia. Considerando: que si bien por decreto de 1º de Diciembre del año próximo pasado, se halla suspensa entre otras la garantía individual que designa el art. 5º de la constitucion, que es uno de los que como violados se invocan, hay que advertir que no haciendo referencia alguna el expresado decreto á la fraccion 4ª del art. 35 de la misma constitucion, debe observarse y acatarse lo determinado en tal fraccion, segun la que, los menores de 18 años no están sujetos al servicio de las armas ni aun en la guardia nacional: que en consecuencia, estando como está probado que Francisco Rosales es menor de 18 años y comprendiéndole lo determinado en la fraccion 4ª del artículo 35, sin que obste á su observancia y acatamiento la suspension de la garantía del ya citado artículo 5º; segun las razones espuestas; por tales consideraciones pues, y de conformidad con el pedimento fiscal. Se declara: Que la justicia de la union ampara y protege á Francisco Rosales, por violarse en su persona en el caso y con su consignacion al servicio de las armas, la garantía que otorga el artículo 5º de la constitucion general, segun la fraccion 4ª del 35. Hagáse saber, remítanse copias al Diario oficial y Semanario judicial para su publicacion; y elévense los autos á la Suprema Corte de Justicia, previa citacion fiscal, para los efectos del art. 13 de la ley de 20 de Enero de 1869. Lo decretó y firmó el C. juez 2º de distrito Lic. José María Canalizo.

Doy fé. José María Canalizo.—Manuel M. de Chavero.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril veinticinco de mil ochocientos setenta y dos.

Visto el juicio de amparo que en 3 de Marzo último promovió ante el juez 2º de Distrito de esta capital, Dª Manuela Mijango por su hijo Francisco Rosales Lopez, alegando: que el ciudadano gobernador del Distrito federal había sacado del Tecpan de Santiago y consignado á dicho Rosales Lopez, joven que solo ha cumplido quince años de edad, á servir en calidad de tambor en la banda del batallón núm. 26 de infantería de línea, violando con ese procedimiento las garantías que otorga la Constitución federal, en sus artículos 5º 13 y 14. Visto el informe del gobernador, autoridad responsable del acto que se reclama, exponiendo que destinó á Francisco Rosales Lopez al servicio de las armas por sus malos antecedentes, y con la autorizacion que ha recibido del ministerio de la guerra en virtud del decreto de 2 de Diciembre de 1871, sobre suspensión de garantías y facultades concedidas al poder ejecutivo. Vista la prueba de la edad que se alega por parte del quejoso; los pedimentos del promotor fiscal, sosteniendo la procedencia en derecho del recurso intentado, las demas constancias de autos; y la sentencia del juez 2º de Distrito que concede el amparo, teniendo en consideracion que Rosales Lopez es menor de 18 años y que como tal, la fraccion 4ª del art. 35 de la Constitución de la República lo exime del servicio de las armas, sin que pueda serle aplicable la ley citada de Diciembre de 1871 que nada dispone sobre aquella mension, y que suponiendo un estado distinto de la menor edad, no afecta á esta en sus disposiciones relativas á las garantías individuales.

Con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869 se resuelve lo siguiente; por sus propios legales fundamentos, es de confirmarse y se confirma la sentencia que pronunció el juez 2º de Distrito de México á 20 del

presente mes de Abril declarando: que la justicia de la Union ampara y protege á Francisco Rosales, por violarse en su persona en el caso y con su consignacion al servicio de las armas, la garantía que otorga el art. 5º de la Constitución general, segun la fraccion 4ª del 35.

Devuélvase sus actuaciones con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CO. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazen.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Anza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis Mª Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Abril veintiseis de mil ochocientos setenta y dos.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

CRIMINAL.

Causa instruida en el juzgado de Distrito del Estado de Hidalgo, contra D. Gabriel Berny por peculado.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL DEL JUZGADO DE DISTRITO.

C. Juez de Distrito.

El promotor fiscal, formalizando la acusacion contra D. Gabriel Berny procesado por delito de peculado, dice: que el delito de que se trata está plenamente demostrado por las confesiones del reo, tanto en su declaracion preparatoria como al contestar los cargos que se le hicieron; y aunque está atacado de enagenacion mental, segun los facultativos que últimamente lo han reconocido, se encuentra en la actualidad en